

Nueva Sociedad Nro. 150 Julio-Agosto 1997, pp. 90-97

EL SENDERO LUMINOSO DE LA DESTRUCCIÓN

Julio Cotler

Julio Cotler: sociólogo, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, Lima.

Palabras clave: sistema político, Sendero Luminoso, años 80, Perú.

Al igual que otros casos latinoamericanos, el Perú ha experimentado durante los últimos veinticinco años una serie de experiencias traumáticas que exacerbaban sus problemas seculares y cuyas consecuencias siguen acosando la imaginación y las conductas individuales y colectivas. De todas esas experiencias, la más dramática ha sido la actuación del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso. La destrucción y las muertes causadas con sus sanguinarios actos terroristas contribuyeron, conjuntamente con otros factores, a agudizar la debilidad tradicional de las instituciones del Estado, a profundizar las divisiones y los enfrentamientos sociales y políticos que acabaron por desgastar y anular a sus protagonistas. Estas condiciones produjeron, a su vez, un estado general de temor y de pesimismo acerca del futuro del país.

Ello motivó la preocupación internacional. La seria posibilidad de que Sendero Luminoso lograra sus propósitos destructivos auguraba un genocidio de tipo polpotiano y la difusión incontenible de problemas explosivos a nivel regional, por lo que varios países formularon planes para una eventual intervención militar.

Contrariamente a las expectativas del jefe de Sendero, el denominado presidente Gonzalo –«quinta espada de la revolución mundial»–, la destrucción cuantiosa de bienes públicos y de asesinatos indiscriminados contra uniformados, funcionarios públicos y autoridades locales, campesinos y dirigentes de organizaciones populares, profesores universitarios, ingenieros y sacerdotes produjeron una reacción de rechazo unánime y dio lugar a una demanda universal en favor de la restauración de la autoridad –la gobernabilidad–, a cualquier precio.

Ello fue un motivo más para que las fuerzas armadas buscaran y, en alianza con el presidente Fujimori, lograran un elevado grado de autonomía con respecto a los otros organismos estatales y de la sociedad, a costa de impunes violaciones de los derechos humanos; y que, a cambio, apoyaran resueltamente la concentración y personalización del poder del Ejecutivo, que culminó con la restricción del Estado de derecho. Estas situaciones se justificaron porque,

supuestamente, serían indispensables para derrotar la subversión, abatir la inflación y recuperar la autoridad estatal.

De ahí que «la razón de Estado» fuera motivo para que Fujimori obtuviera el apoyo mayoritario a su gestión autoritaria. Pero, en la medida que el gobierno ha logrado, mal que bien, estabilizar relativamente el país, las demandas para restaurar plenamente el Estado de derecho y los derechos ciudadanos adquieren importancia crucial, lo que se manifiesta en las crecientes muestras de desafecto y rechazo a Fujimori y su gobierno.

1. Las reformas antioligárquicas y nacionalistas del gobierno militar (1968-80) y el control corporativo de la participación social cambiaron el perfil del país y dieron lugar a la emergencia de nuevos actores en la escena nacional. Paradójicamente, esas medidas y sus resultados derivaron en una creciente e incontenible movilización en contra del gobierno, debido a las frustradas expectativas distributivas, así como a la exclusión social en las decisiones gubernamentales debido al autoritarismo del gobierno militar. En estas condiciones, las emergentes y fragmentadas organizaciones de la «nueva izquierda» capturaron las direcciones y radicalizaron los movimientos populares, en tanto los partidos políticos tradicionales se encontraban invernando. Dicha radicalización respondió a la competencia «ideopolítica» entre el gobierno militar y las izquierdas, así como a la rivalidad existente entre varias ramas de fidelistas, maoístas, trotskistas y albaneses para hacerse del legado de Mariátegui y de la hegemonía revolucionaria.

El gobierno procuró satisfacer algunas demandas populares, para lo cual recurrió a las facilidades crediticias de la banca internacional; pero en 1974, el abultado endeudamiento externo agotó esa posibilidad y el país inició un largo ciclo de crisis económica, ocho años antes de que estallara en América Latina. Por tal motivo, se vio precisado a reprimir selectivamente al movimiento popular y sus direcciones radicales, lo que confirmaría el carácter «reformista» del gobierno para unas izquierdas y «fascista» para otras. Después de diferentes esfuerzos para capear el temporal, el ajuste económico en 1977 constituyó el punto álgido en las relaciones conflictivas entre gobierno y movimiento popular, que hizo decir que el país se encontraba en una situación pre-revolucionaria. Sin embargo, el gobierno logró remontar esta situación con el apoyo de los partidos políticos, particularmente del Apra, a cambio del restablecimiento de la institucionalidad democrática.

La convocatoria a una Asamblea Constituyente en 1978 y luego a los comicios generales en 1980, propició el alineamiento de la población detrás de los jefes políticos y sus partidos, lo que produjo la división del movimiento popular. En tanto las bases presionaron a las direcciones izquierdistas para participar unificadamente en estos eventos y así contar con una significativa representación y mediación política en el debate y en las decisiones públicas. A pesar de su desdén por las instituciones democráticas y de su «cretinismo

parlamentario» así como de sus proclamadas inclinaciones militaristas y revolucionarias, estos dirigentes se vieron obligados a intervenir en las elecciones. Pero, a pesar de varios intentos para constituir la «alianza revolucionaria de izquierda», el caudillismo y la segmentación social e ideológica de las organizaciones fueron determinantes para impedirlo. No obstante, en las elecciones de 1980, que constituyeron el último paso para el traspaso del poder de los militares a los civiles, cerca de una cuarta parte del electorado votó por los candidatos afiliados a alguna de las izquierdas.

Pero, su incorporación en la nueva institucionalidad política dio cabida para que grupúsculos aislados de las organizaciones y de las movilizaciones sociales estigmatizaran a las izquierdas de reformistas y de traidoras, por abjurar de los métodos y de los objetivos revolucionarios, de los que ellos serían los únicos y fieles depositarios. Tal fue el caso del Partido Comunista - Sendero Luminoso que, acto seguido, atacó con fiereza insólita a todos los que no acataban sus previsiones.

2. Durante los años 60, la explosiva migración rural a las ciudades y el abrupto crecimiento de la población estudiantil, particularmente de la universitaria, constituyeron los puntales de las transformaciones sociales y políticas, y de la emergencia de movimientos populares y de las izquierdas. La algarabía revolucionaria y estudiantil de la época se asentó en los claustros universitarios. Los intensos debates ideológicos inspirados por la revolución cubana, el conflicto chino-soviético y la actuación del gobierno militar propiciaron interminables divisiones de la llamada «nueva izquierda» que afectaron la vida académica. De los varios desprendimientos maoístas surgió Sendero Luminoso en Ayacucho, a fines de los 60.

Esta ciudad serrana, enclavada en una de las áreas de mayor atraso y pobreza del país, contaba desde principios de la década con un centro universitario llamado a liderar el progreso regional, que reclutaba sus millares de estudiantes entre las decadentes capas terratenientes regionales –los mistis– y entre la población rural en proceso de desarraigo campesino e indígena. Este centro adquirió una importancia gravitante en la ciudad y en la región, por ser un espacio privilegiado de encuentro y de organización de las movilizaciones estudiantiles y campesinas, lo que contribuyó para que se constituyera, como en otros casos similares, en un campo de batalla ideológico y político.

En estas condiciones, el núcleo de Sendero formado por intelectuales provincianos y mistis –la «sagrada familia»– estableció en la universidad mecanismos clientelistas y su jefe formuló una ideología extremadamente dogmática y mesiánica, el llamado «pensamiento Gonzalo». Basada en supuestos principios científicos marxistas - leninistas - stalinistas - maoístas, y complementada con los aportes de Guzmán –de ahí la denominación de «quinta espada»– esta ideología interpretaba los fenómenos sociales en términos de un movimiento continuamente conflictivo, del que eran eliminados

violentemente los obstáculos que impedían avanzar y lograr la meta inexorable de la historia, el comunismo. La voluntariosa aseveración de Guzmán de que Sendero Luminoso se hacía cargo de ese propósito, en el Perú y en el mundo, era motivo suficiente para constituirse en el eje de la revolución mundial. Por tal razón, Gonzalo declaró que Sendero «es el resultado de quince mil millones de años de historia de la materia, en esta parte del universo...»

El uso de un lenguaje particularmente virulento y desdeñoso hacia otras concepciones políticas estaba destinado a desprestigiar y «aplastar» las ambigüedades liberales y reformistas de los intelectuales pequeño burgueses. En tanto que las certezas absolutas del pensamiento Gonzalo debían guiar la violencia senderista para hacer de partera de la historia, mediante el acarreo de las «mesnadas» campesinas para destruir la «semi-feudalidad y el capitalismo burocrático» que lo sustentaba. Sobre sus ruinas se levantaría el comunismo; tal como la revolución cultural había intentado hacerlo en China, pero que había sido frustrado –temporalmente– por la intervención de algunos pocos traidores y oportunistas.

Así, las relaciones de clientela y la ideología total, y totalitaria, fueron medios para que Sendero Luminoso reclutara y adoctrinara férreamente a sectores juveniles desarraigados de su medio rural arcaico, en proceso de descomposición, y ansiosos de encontrar nuevos lazos de dependencia que les otorgara las fórmulas para reemplazar sus viejas certezas absolutas. Esto se acompañó con una profunda hostilidad al gobierno militar y al constitucional, como a las izquierdas que, por estar involucradas en diarios zigzagueos políticos dejarían ver su inconsecuencia con los principios asumidos y obstaculizarían el triunfo de la lucha final.

Producto de ello, Sendero se constituyó en una organización político-militar, secreta y vertical, en la que los subordinados se comprometían, mediante cartas de sujeción (sic) al presidente Gonzalo, acatar disciplinadamente sus órdenes y propagar sus enseñanzas y profecías, y dar «pruebas de sangre» por ello. Es así como Sendero Luminoso se constituyó en una sub-sociedad cerrada e impermeable a las influencias externas y, en esa medida, hostil a todas y cada una de sus expresiones.

3. La sanguinaria irrupción senderista en los poblados y caseríos ayacuchanos, junto con la represión militar colocaron al campesinado y las organizaciones sociales entre sus fuegos cruzados. De un lado, los enfervorizados senderistas, dispuestos a «batir el campo» de los supuestos rasgos de la semi-feudalidad que caracterizaría al país y del capitalismo burocrático que la sustentaría, atacaron y destruyeron las organizaciones y sus bienes comunales; bloquearon el acceso de los campesinos al mercado y los sometieron compulsivamente a trabajos colectivos. A su vez, ejecutaron pública y cruelmente a quienes resistían tales apremios; a representantes de la autoridad, local y nacional, así como a

pequeños comerciantes y medianos terratenientes que no habían sido afectados por la reforma agraria.

De otro lado, el repliegue de la policía y el ingreso militar en Ayacucho y en las zonas colindantes, se acompañó de una represión indiscriminada que costó la vida de varios miles de personas, pero redujo las posibilidades de la acción subversiva en Ayacucho y en la sierra central. La acción combinada de Sendero y los militares determinó que alrededor de medio millón de personas se vieran forzadas a abandonar terruños, poblados y ciudades a fin de escapar de sus furias. Estos desplazados por la guerra se orientaron a la selva, donde se dedicaron a la producción cocalera; a las ciudades de la sierra y de la costa central, principalmente a Lima, para sumarse a la legión de «informales».

Las bases senderistas siguieron este desplazamiento. Lo que se trasladaron a la selva se dedicaron a «proteger» a los productores de coca y a los traficantes de droga de la persecución y de las exacciones de las autoridades, por lo que obtuvieron ingentes recursos destinados a reclutar nuevos miembros y promover la subversión. Ello fomentó dichas actividades ilegales y, en esa medida, contribuyó a corromper y debilitar más la función pública; asimismo, a que la población de esta zona de colonización desconociera las normas estatales.

Los senderistas que se desplazaron a la sierra central y a la costa buscaron entroncarse con los jóvenes serranos y ampliar su esfera de acción, en las universidades como en los barrios populares, en las fábricas, talleres y entre los ambulantes que pululan en Lima. Sobre esta base organizativa, destruyeron bienes públicos que, como en el caso de la electricidad, sumió a Lima y las principales ciudades en intermitentes períodos de desabastecimiento. Los asesinatos de uniformados y de funcionarios públicos se multiplicaron, y los coches-bomba contra sedes de organismos públicos y privados se hicieron hechos cotidianos.

Asimismo, en su propósito de batir el campo, Sendero Luminoso desprestigió, amenazó y aniquiló a dirigentes de organizaciones laborales, barriales y femeninas; de estudiantes y profesionales, con la intención de capturar dichas organizaciones o destruirlas.

Por todo esto, los gobiernos de la década pasada decretaron el Estado de sitio y entregaron el control a los militares, lo que resultó en múltiples violaciones de los derechos civiles, políticos y humanos.

En resumen, las acciones terroristas de Sendero y las violaciones de los derechos humanos de las fuerzas armadas crearon un estado de inseguridad que desorganizó las débiles bases institucionales de la sociedad y de la política. Ello fue determinante para producir un estado de temor y desánimo

generalizado, que condicionó una ola emigratoria del país, legal e ilegal, de distintos sectores sociales.

4. Los efectos perversos de la subversión se sumaron al estallido de la crisis internacional de la deuda en 1982 y a los estragos causados por la corriente marina El Niño, que agravaron las dificultades económicas. El resultado político fue el triunfo de la Izquierda Unida en las elecciones municipales de Lima de 1983 –aunque ello no logró remontar las divisiones de las izquierdas– y el espectacular éxito de Alan García y del Apra en las elecciones generales de 1985, con su plataforma «nacionalista, democrática y popular». Entonces, con una disimulada ostentación, se afirmó que el país contaba con la izquierda, el movimiento populista y el movimiento subversivo más poderosos del continente.

La política económica heterodoxa que García puso en práctica para realizar esa plataforma, también estaba destinada a que los movimientos subversivos desistieran de sus propósitos. Pero Sendero Luminoso multiplicó los actos terroristas y para dar «pruebas de sangre» sus presos se rebelaron en 1986, siendo pasados por las armas alrededor de 250 –simultáneamente a la realización del Congreso de la Internacional Socialista en Lima.

Pero la fallida heterodoxia económica, el afán caudillista de García y las violaciones a los derechos humanos produjeron serias fisuras en el Apra y en las izquierdas: para cerrarlas y movilizar a las masas alrededor suyo, García proclamó en 1987 la estatización del sistema financiero. La resistencia de sus propietarios fue apoyada exitosamente por la movilización anti-estatista y antipopulista que dirigió Vargas Llosa, y que culminó en la constitución de una fuerza liberal intransigente que polarizó, más aún, el país y desató una incontenible espiral inflacionaria.

Así, a fines de los 80, esta fuerza liberal se sumó a las izquierdas, al populismo y a la subversión para dar cuenta del grado de fragmentación política y del estado de convulsión del país. Ello parecía confirmar la hipótesis elaborada por algunos analistas acerca de la extrema división de la sociedad y de la fragilidad del Estado, y que Guzmán, de acuerdo a sus preferencias orientales, calificaba de «tigre de papel».

5. En estas condiciones, Sendero Luminoso, García y la irrupción liberal se conjugaron para producir una crisis de las identidades sociales y políticas tradicionales, desacreditando y anulando sus referentes organizativos e ideológicos.

Al inicio de la guerra, el presidente Belaúnde calificó a los senderistas de abigeos; otros, creyeron que respondía a oscuros planes militares, o bien, a proyectos cubanos y de los soviéticos. Sin embargo, pronto la concepción anacrónica (¿delirante?) y la violencia extrema e indiscriminada que adoptó Sendero Luminoso, llevó a decir que Sendero era una expresión emblemática

de las profundas transformaciones y contradicciones del país, por lo que se distinguía de otros movimientos y procesos revolucionarios. Por ello se le comparó con el movimiento de Túpac Amaru en el siglo XVIII, se le interpretó como una expresión de la «violencia estructural» secular y de la «rabia» contenida de la población andina; y, por último, que era manifestación de la crisis del agro y del campesinado de la sierra.

Estas últimas explicaciones produjeron en los sectores radicalizados del Apra y en las izquierdas actitudes y comportamientos ambivalentes. De un lado porque compartían con Sendero, en términos generales, los fines revolucionarios, pero consideraban inapropiados sus métodos para lograrlos. Pero no por ello, como fue el caso de García y de figuras destacadas de las izquierdas, disimularon su admiración por la firmeza y al arrojo de los senderistas, dispuestos a matar y morir por la causa.

De otro lado, dicha ambivalencia también se debió a la violación impune de los derechos humanos y a la incapacidad del régimen constitucional para encarar el senderismo políticamente y dar solución a los problemas del país. Pero esa actitud derivó en confusión, cuando el Apra y las izquierdas se vieron impotentes para defender a sus miembros y dirigentes, así como la de los integrantes de las organizaciones populares, de las amenazas y de los asesinatos de Sendero.

Además, el desastre económico del gobierno de García y la carencia de soluciones válidas se añadieron para que sus bases sociales abandonaran y descalificaran a dichas organizaciones y, en general, a la acción política por su manifiesta ineficacia. Por esto, la población que poco tiempo atrás había dado mayoritariamente su voto al Apra y a las izquierdas, ahora se manifestaba dispuesta a votar por un «independiente» en 1990, en la esperanza que fuera su tabla de salvación, lo que confirmaba la orfandad en que habían caído las que habrían sido las más poderosas organizaciones populistas e izquierdistas de América Latina, poco tiempo atrás. A ello se agregaba, la perplejidad de las izquierdas ante el desmoronamiento del muro de Berlín y la crisis del marxismo. Entonces, los militares, resentidos con los políticos por sus críticas y restricciones impuestas a sus acciones, encontraron en el aislado presidente Fujimori la posibilidad de realizar sus aspiraciones.

En la excepcionalmente difícil situación económica del país, el presidente se vio obligado a desistir de sus vagas ofertas electorales y aplicó ortodoxamente el ajuste estructural, como condición necesaria para recibir la contribución económica de gobiernos y de organismos multilaterales. En estas circunstancias, los tecnócratas insistieron que al ingresar el Perú en la «sala de cuidados intensivos» debía contar con un decidido Ejecutivo dispuesto a cortar por lo sano, capaz de resistir tenazmente cualquier oposición y, en el peor de los casos, debía eliminarla.

En condiciones en que el Presidente gozaba del apoyo relativo de la mayoría de la representación parlamentaria para tal efecto, y que las organizaciones sociales y políticas se encontraban desarticuladas, estuvo en capacidad de cumplir autoritariamente tales prescripciones. Efectivamente, el ajuste, a pesar de los sacrificios que produjo y de la disminuida oposición aprista e izquierdista, contuvo y abatió la inflación, lo que contribuyó a elevar la imagen de Fujimori a la condición de «salvador». Paralelamente, los militares habían recurrido a un argumento semejante al de los tecnócratas para que se les entregaran amplias atribuciones para derrotar y eliminar la subversión, condición necesaria para el éxito del ajuste y del despegue económico del país.

Pero, más que a la disminuida oposición a las reformas económicas, la decisión de Fujimori y de los militares para quebrar el Estado de derecho en 1992 respondió a la resistencia parlamentaria para conceder dichas atribuciones a las Fuerzas Armadas, puesto que su naturaleza anti-constitucional constituía una amenaza a la seguridad de las personas y militarizaba la sociedad. Sin embargo, a pesar de contar con el respaldo popular, esta decisión fue detenida por la presión internacional y por carecer de una contraparte nacional, tuvo que contentarse con un resultado mediatizado: la «dictablanda». Más aún, porque meses más tarde, un grupo especial constituido por el gobierno anterior capturó a Guzmán y a la cúpula senderista, lo que dio inicio al desmantelamiento de la organización. Esto fue recibido con un mayúsculo sentimiento de alivio colectivo que elevó la aprobación de Fujimori a niveles insólitos.

Así, la relativa estabilidad económica y la derrota de Sendero Luminoso, con la consiguiente recuperación de la gobernabilidad, a pesar de sus evidentes visos de autoritarismo han valido al presidente para gozar de la aprobación mayoritaria. Pero, en los últimos meses la opinión pública se ha volcado en contra suya puesto que, en las nuevas condiciones, la postergación de los reclamos económicos de la sociedad y las crecientes demostraciones autoritarias del gobierno no se justifican. De ahí que hoy los dos temas básicos de la agenda del país sean la reducción de las desigualdades, en el nuevo marco macro-económico, y la recuperación plena de las instituciones democráticas.

Queda por ver si para el logro de estos objetivos, la sociedad, el gobierno y los militares están dispuestos a evitar enfrentamientos políticos que, eventualmente, pueden revertir en nuevas experiencias traumáticas, como las de Sendero Luminoso.